JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre del dos mil veintidós.

Consulta de Desacato No. 110014189003 2020 00124 03

De conformidad con lo previsto por el inciso final del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, procede el Juzgado a pronunciarse en grado jurisdiccional de consulta sobre el trámite incidental que adelantó el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple con Sede Desconcentrada de la Localidad de Suba-Bogotá, en la radicación de la referencia, en virtud del cual se sancionó a Fabio Leonardo Yate Sabogal.

1. ANTECEDENTES

1.1. El 09 de junio de 2020, el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple con Sede Desconcentrada de la Localidad de Suba- Bogotá, amparó el derecho fundamental al buen nombre y honra de la señora Andrea del Pilar Ramírez Amaya; dicha decisión fue objeto de impugnación, por lo que este despacho, en sentencia de segunda instancia del 15 de julio de 2020 dispuso modificar el fallo de primer grado en el sentido de:

“PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental a la honra e intimidad de la señora ANDREA DEL PILAR RAMÍREZ AMAYA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.349.537, quien, a través de apoderado judicial, instauró la acción en contra de FABIO LEONARDO YATE SABOGAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.232.847, por las razones esbozadas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a FABIO LEONARDO YATE SABOGAL identificado con cédula de ciudadanía No. 80.232.847, que en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, si aún no lo ha efectuado, deberá retirar de sus cuentas en las redes sociales de Twitter e Instagram, cuentas que se identifican así: @IndigenaMuisca, @YaTeLe00 y @YaTeLe0, TODA publicación relacionada a la vida personal de la actora, incluso las generadas con posterioridad al fallo de primera instancia (...)

1.2. Mediante escrito del 26 de abril de 2022, la accionante informó que Fabio Leonardo Yate Sabogal no había dado cumplimiento a la referida orden y, en consecuencia, solicitó que se iniciara el trámite incidental.

1.2. En auto del 06 de mayo del año en curso, se requirió al convocado para que acatará la orden de tutela, y de no hacerlo, indicara las razones para ello. Frente a dicha intimación, en escrito del 09 de mayo de hogaño, el accionado manifestó haber dado cumplimiento a lo ordenado, a través de la cuenta de twitter “@IndigenaMuisca”; no obstante, tanto esa cuenta, como las denominadas “ @YaTeLe00 y @YaTeLe0” se encontraban suspendidas en la

actualidad. De dicha repuesta se dio traslado a la accionante por auto del 20 de mayo de 2022.

1.3. En comunicación electrónica del 25 de mayo, la parte actora informó que si bien el demandado se había retractado y eliminado de sus cuentas “@IndigenaMuisca, @YaTeLe00 y @YaTeLe0” las publicaciones denigrantes en su contra, continuaba vulnerando los derechos fundamentales amparados, a través de la cuenta “@MuiscaIndigena”; por lo que en auto del 10 de junio de este año, se instó por última vez al accionado para que cumpliera con el fallo de tutela. Frente a dicho requerimiento, el convocado afirmó haber acatado la orden judicial, afirmando que era la accionante quien lo atacaba en repetidas ocasiones, por lo que las publicaciones que realizaba las hacía en su defensa.

1.4. En auto del 29 de julio de 2022, el juzgado de primera instancia dio apertura al incidente de desacato contra Fabio Leonardo Yate Sabogal, y tras encontrar que no se había dado cumplimiento a la orden constitucional, a través proveído del 12 de agosto de esta anualidad, dispuso sancionar al incidentado con arresto de dos días y multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Sabido es que la acción de tutela tiene como propósito la salvaguarda inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, de modo que, una vez verificada su vulneración o amenaza, las órdenes que se impartan para ampararlos deben ser observadas. Pero eventualmente puede suceder que no se cumplan, caso en el cual, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, prevé el procedimiento a seguir para obtener su acatamiento. De ahí que, el artículo 52 *ibídem* estatuya que la persona que incumple la orden tutelar incurre en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de veinte salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de las sanciones penales que devengan procedentes.

Ahora, para que resulte viable la imposición de las sanciones destacadas, es necesario que aparezca demostrado en la persona de la autoridad pública o en la del particular, una responsabilidad subjetiva, es decir, que esté probado que de su parte existió un propósito inequívoco de eludir las órdenes de

amparo pues el simple incumplimiento no comporta una conducta reprochable, como lo ha reiterado la Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos¹,

2.2. Bajo ese contexto, este Juzgado, en primera medida, procede al análisis del elemento objetivo, es decir, el cumplimiento o no del fallo de tutela; destacando, que en este se ordenó al accionado retirar de sus cuentas en las redes sociales denominadas “@IndigenaMuisca, @YaTeLe00 y @YaTeLe0”, toda publicación relacionada a la vida personal de la actora, incluso las generadas con posterioridad al fallo de primera instancia.

En lo que refiere a dichas cuentas, las partes involucradas concordaron en señalar que de las mismas fue eliminada toda publicación en contravía de la reputación de la actora, y que estas se encontraban suspendidas, por lo que en principio, el fallo de tutela podría entenderse por cumplido. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el despacho ordenó que también debían ser retiradas las publicaciones posteriores al fallo de primera instancia, por lo que si el convocado creó una nueva cuenta identificada como “@MuiscaIndigena” y en ella siguió atacando a la actora, su conducta constituye desacato a la orden de tutela.

2.3. Ahora bien, en relación con el elemento subjetivo, debe señalarse el incidentado Fabio Leonardo Yate Sabogal se encuentran debidamente notificado, máxime cuando frente a cada requerimiento realizado por el despacho, allego manifestación en su defensa; no obstante, como no se acreditó el cumplimiento a la orden constitucional, pese al conocimiento de la presente actuación, ello constituye una conducta desobligada del convocado por mantenerse en desacato a la orden del Juez de Tutela.

2.4. No obstante lo anterior, aunque el *a quo* consideró que el accionado ha venido desplegando actuaciones que van en contra vía de los derechos fundamentales protegidos en sede de tutela a la accionante, desde la cuenta de twitter “@MuiscaIndigena”, lo cierto es que, al ser revisada por este despacho, y a la cual se puede acceder a través del link: “<https://twitter.com/MuiscaIndigena/status/1559688933256085505?t=XzetYX4G6ba4cPOTBQnkVg&s=19>”, no se advierten dichas publicaciones, por lo que puede inferirse que las mismas fueron retiradas, sin que se sea posible establecer si su eliminación se realizó antes o después de la imposición de la sanción. En ese sentido, al no tenerse certeza del incumplimiento de la orden de tutela por parte del convocado, la providencia que lo sancionó no puede ser confirmada.

¹Ver entre otras Sentencias: T- 763 de 1998, T-1038 de 09 de agosto de 2000, T-458 de 2003 y, Autos: 108 de 26 de mayo de 2005 y 126 de 05 de abril de 2006.

Aunado a lo anterior, no se advierte que la dosificación de la multa impuesta se encuentre debidamente soportada; es decir, de las consideraciones expuestas por el juez de primera instancia, no se halla motivación alguna que exteriorice las razones por las cuales impuso un término de 2 días de arresto, ni porque se fijó una multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Se precisa, que la imposición de la sanción implica examinar no solo el cumplimiento o no de la orden constitucional, sino la gravedad de la conducta en relación con la garantía constitucional afectada, por lo que se deben exponer los argumentos sobre el particular, a fin de establecer el por qué de la prolongación del periodo de arresto de un lado, y la cuantía de la multa del otro, y justificar debidamente su tasación, como evidente componente del debido proceso del sancionado, teniendo en cuenta que dicha sanción puede arribar hasta los “20 salarios mínimos mensuales” desde el punto de vista económico y a un arresto “hasta de seis 6 meses” (art. 52 Dcto. 2591/91), con la salvedad prevista en el mismo artículo que la regula.

Por lo expuesto, se REVOCA el auto de fecha 12 de agosto de 2022 proferido por el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple con Sede Desconcentrada de la Localidad de Suba- Bogotá, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído; en su lugar, se declara que la Fabio Leonardo Yate Sabogal no ha incurrido en desacato de la sentencia de 09 de junio de 2020, modificada en fallo del en sentencia de segunda instancia del 15 de julio de 2020.

Notifíquese a las partes por el medio más expedito y eficaz.

Cúmplase

El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO

D.L.R

Firmado Por:

Luis Augusto Dueñas Barreto

Juez
Juzgado De Circuito
Civil 025
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2460b4c7cea48eb93dd345bb3809bc528c0ced0626eb1f65eb650699fa0abdea**

Documento generado en 16/09/2022 11:13:15 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>